Analizadas las constancias que integran el expediente administrativo disciplinario **A-\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** y

##  R E S U L T A N D O

**PRIMERO.** En sesión celebrada el 13 de diciembre de 2018 el Consejo de la Judicatura del Estado determinó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en su actuar como \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, con base en el en el oficio 795/2018, signado por la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Secretaria de Acuerdo y Trámite de la referida Sala Auxiliar, a través de la cual remitió el acta administrativa levantada, el 24 de abril de 2018, por la Magistrada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*,\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*; asimismo, en aquel proveído, en términos de lo dispuesto en el artículo 206 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se dispuso requerir a la funcionaria señalada como posible responsable un informe administrativo, mismo que se tuvo por recibido el 02 de mayo de 2019 y se le admitieron medios de prueba que ofreció en su defensa.

 **SEGUNDO.** El 28 y 31 de mayo de 2019, se tuvo por recibida la copia certificada del libro de registro de expedientes que se lleva en la \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*; y dando cumplimiento a le encomienda que le fue solicitada al Secretario General de Acuerdos del citado tribunal, respectivamente. El 03 de diciembre de 2019 se señaló fecha y hora para que se desahogara la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se llevó a cabo el 21 de febrero de 2020 y, a su vez, se ordenó turnar el expediente a la Comisión de Vigilancia y Disciplina para que formulara el proyecto de resolución definitiva correspondiente, y lo presentara al Consejo de la Judicatura para resolver lo conducente, por lo que en esta sesión se procede a emitir tal resolución, conforme a los siguientes:

## C O N S I D E R A N D O S

 PRIMERO. Competencia. De acuerdo con el artículo 143 primer párrafo de la Constitución Política del Estado, en relación con el numeral 199 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Consejo de la Judicatura, como órgano disciplinario, tiene competencia para conocer de las probables faltas administrativas atribuidas a los servidores públicos judiciales integrantes de los juzgados del Poder Judicial del Estado.

A su vez, el numeral 200 de la citada ley dispone que en contra del presunto autor de alguna de las faltas previstas en la sección segunda del capítulo cuarto, se proceda de oficio o en virtud de queja presentada por escrito o comparecencia ante la autoridad que corresponda. Así que este órgano colegiado tiene facultad legal para proceder administrativamente en contra de un funcionario judicial, tratándose de queja presentada por instancia de parte inconforme, o bien, mediante un análisis de oficio del asunto que se trate.

**SEGUNDO. Conducta y problema jurídico.** Los miembros que integran este órgano colegiado disciplinario ponderarán los hechos y los medios de prueba o elementos de convicción que obran en el presente procedimiento administrativo para efecto de justificar si procede o no alguna sanción por actos u omisiones que hubiesen afectado la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar la funcionaria pública señalada como posible responsable con motivo del desempeño de su cargo, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

El presente procedimiento disciplinario se inició el 13 de diciembre de 2018 en contra de la licenciada **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***, porque posiblemente había afectado los principios de legalidad y eficiencia que estaba obligada a observar en el desempeño de su cargo, esto por omitir cumplir con la obligación de formular el proyecto del auto de radicación o de inicio que le fue encomendado, ya que desde el 05 de marzo de 2018 se le turnó a la servidora pública de referencia el expediente **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***, así como, sus anexos y el cuaderno de apelación, relativo al juicio ordinario civil promovido por **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** en contra de la persona moral denominada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Sociedad Anónima de Capital Variable.

El expediente judicial y los anexos fueron enviados el 05 de marzo de 2018, mediante el oficio 330/2018, singado por el licenciado \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Juez de Primera Instancia en Materia \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* del Distrito Judicial de \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*; y fue hasta el 24 de abril de 2018 en que dicha funcionaria formuló el proyecto de resolución, es decir, el auto de radicación o de inicio del toca civil \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, el cual fue entregado a la Magistrada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, entonces \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.

Se puntualizó en el acuerdo de inicio que la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en su actuar como \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* tenía la encomienda de formular y de elaborar el proyecto del auto de radicación o de inicio de los expedientes que fueran remitidos por los Juzgado de Primera Instancia para la substanciación de los recursos de apelación, como aconteció en el asunto que se analiza, según lo prevé el artículo 880 fracción I del Código Procesal Civil del Estado, el cual literalmente señala lo siguiente:

**ARTÍCULO 880.**

**Substanciación del recurso de apelación.**

Para sustanciar la apelación en segunda instancia, tendrán aplicación las siguientes prevenciones:

[...]

I. Llegados los autos originales o el testimonio, en su caso, así como el cuaderno auxiliar de apelación, y transcurrido el término concedido a las partes para presentarse a la sustanciación del recurso, el Magistrado del Tribunal Unitario, el Presidente de la Sala Civil y Familiar o del Pleno, según corresponda, sin necesidad de vista o informe, dentro de los tres días siguientes al vencimiento de dicho término o a la llegada de los autos o expedientes, cuando aquél se hubiera vencido antes de ésta, dictará resolución en la que, a petición de parte o de oficio, decidirá sobre la admisión del recurso y la calificación del grado hecha por el juzgador de primera instancia. Si declara inadmisible la apelación, mandará devolver el expediente o el testimonio al juzgador de primer instancia y si revoca la calificación del grado, procederá en consecuencia.

[...]

Con lo antes expuesto, los miembros integrantes del Consejo de la Judicatura establecieron -el 13 de diciembre de 2018- que la servidora pública señalada como posible responsable omitió formular el proyecto del acuerdo de radicación o de inicio dentro de los 3 días siguientes a su llegada, pues transcurrieron 31 días, sin contar los días inhábiles, lo que originó que no se observara el principio de la impartición de justicia de manera pronta, según lo prevé el artículo 17 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dice: *[…] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta […]*

Entendiéndose que el proyecto del proveído que debió elaborar consistía en el auto de radicación que dio inicio a la substanciación del recurso que dio origen al toca civil \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 del Código Procesal Civil del Estado, se trata de una resolución denominada auto, a través del cual se impulsa el procedimiento del trámite del medio de impugnación respectivo, pues el mismo se dictará a petición de parte o de oficio mediante el cual se decida sobre la admisión del recurso y la calificación del grado que hizo el juzgador de primera instancia o, en su defecto, lo que debe declarar inadmisible para devolver el expediente o el testimonio para proceder en consecuencia.

Con base en el apuntado hecho, la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en su actuar como \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, probablemente, incurrió en la falta prevista en el artículo 185 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente en que omitió formular el proyecto de resolución -auto de radicación o de inicio para la substanciación del recurso de apelación- que le fue encomendado, en el término fijado para ello; dicha falta es de carácter no grave, según lo prevé el numeral 198 fracción III del citado ordenamiento legal, misma que puede dar lugar a imponer como sanción un apercibimiento o amonestación.

Ahora bien, para que el Consejo de la Judicatura pueda tomar una decisión respecto a la falta administrativa que se atribuye a la servidora pública, deberá fundarse en los medios de prueba que en forma regular y oportuna se aportaron al presente procedimiento administrativo. De ahí que a continuación se analizan los medios de prueba siguientes:

**1.** El presente procedimiento administrativo se originó con el oficio \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, signado por la Secretaria de Acuerdo y Trámite \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, adscrita a la \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, de fecha 04 de junio de 2018, a través del cual remitió copia certificada del acta levantada a la servidora pública señalada como posible responsable el 24 de abril de 2018, la cual para una mejor ilustración de lo que se asentó en dicha acta a continuación se escanea tal documento:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

El medio de prueba antes descrito adquiere valor probatorio pleno, por haber intervenido en su elaboración funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, según lo prevén los artículos 415, 416 y 436 del Código de Procedimientos Penales del Estado, supletorio en materia disciplinaria, con el cual se justifica, en conjunto con los demás medios de convicción, que la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* omitió elaborar el proyecto del acuerdo de radicación del toca civil \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, dentro del término de 3 días, contados a partir del 05 de marzo de 2018, pues en ésta fecha se le turnó el expediente \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, sus anexos y cuaderno de apelación, a fin de que procediera a su revisión para determinar si se desechaba o se requería al juez de primer grado lo correspondiente, ya que el proyecto del auto de radicación lo hizo hasta el 24 de abril de 2018, situación que fue corroborada por \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, quien en el acta que levantaron el 24 de abril de 2018, expuso lo siguiente:

[...]

Que sabe y le consta que los expedientes que nos remiten los juzgados de primera instancia, se canalizan para elaborar el auto de radicación a laguna de las secretarias auxiliares, o a las secretarias de estudio y cuenta, conforme al turno que corresponda, según el registro que se lleva en el libro respectivo y, que en este caso, el expediente referido fue entregado a la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* en la fecha indicada.

[...]

Cabe precisar que en la misma acta que se levantó a la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, ésta señaló que: *[…] en la fecha en que recibió el referido expediente estábamos en períodos de visitas en los juzgados por lo cual hubo excesiva carga de trabajo. Además, manifiesta que dicho expediente es bastante voluminoso, ya que consta de 2265 fojas útiles por lo que su revisión le tomó más tiempo del normal y desea agregar que entre la fecha en que se le canalizó el expediente en comento y la fecha en que entregó el auto de radicación, se presentó el período vacacional de semana santa, del día veintiséis al treinta de marzo del presente año y que se compromete a no incurrir de nueva cuenta en demora de los asuntos que se le encomienden […]*

**2.** Para corroborar lo anterior, la Secretaria de Acuerdo y Trámite de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado remitió copia certificada del libro de distribución de expedientes recibidos para radicación, en donde se desprende que el 05 de marzo de 2018 llegaron los autos del expediente \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, del índice del Juzgado \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* del Distrito Judicial de \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, el cual consta de 3 tomos con un total de 2265 fojas. Medio de prueba adquiere valor probatorio pleno, esto por haber sido elaborado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, según lo prevén los artículos 415, 416 y 436 del Código de Procedimientos Penales del Estado, supletorio en materia disciplinaria, con el cual se demuestra que en la fecha antes descrita llegaron los autos del citado expediente judicial, que en conjunto con los demás medios de convicción, se justifica que hasta el 24 de abril de 2018 se elaboró el acuerdo de radicación.

**3.** Así mismo, obra copia certificada del toca civil \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el licenciado \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en su calidad de abogado patrono de \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de agosto del 2017, dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* del Distrito Judicial de \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, dentro de los autos del juicio civil ordinario \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, con la cual se desprende que el 05 de marzo de 2018 se recibió el oficio 330/2018, de fecha 26 de febrero de 2018, signado por el titular del citado órgano jurisdiccional, a través de cual remitió los autos del expediente judicial de referencia; además, se encuentra el acuerdo emitido el 25 de abril de 2018, en el que la Magistrada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* determinó -en esencia- que se declaraba admitido, en el efecto devolutivo, el medio de impugnación antes señalado, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 415, 416 y 436 del Código de Procedimientos Penales del Estado, supletorio en materia disciplinaria.

**4.** Respecto al Informe administrativo que rindió la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, con fecha 26 de abril de 2019, en este apartado solo se enunciará lo que le perjudica, pues las posibles atenuantes que señala en su favor se examinarán más adelante en el rubro denominado argumentos defensivos de la servidora pública. La mencionada funcionaria señaló textualmente lo siguiente:

[...] Efectivamente, el cinco de marzo del año dos mil dieciocho, me fue turnado el expediente judicial número \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, así como sus anexos y cuaderno de apelación, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* del Distrito Judicial de \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Coahuila, mismo que se proyectó el auto de radicación respectivo, el veinticuatro de abril del mismo año

[...].

Lo que informó la juzgadora, al no constituir una confesión, se aprecia conforme a las reglas de valoración para el testimonio, tanto en lo que le beneficie, como en lo que le perjudique, según lo prevé el artículo 339 del Código de Procedimientos Penales del Estado, de aplicación supletoria en materia administrativa; lo que expuso la funcionaria se considera con valor probatorio de indicio, con el cual se justifica que a la Secretaria de Acuerdo y Trámite \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* si le fue turnado el expediente \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* para la elaboración del proyecto del acuerdo de radicación del toca civil \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, el cual omitió formularlo dentro del plazo legal de 3 días siguientes cuando llegaron los autos del expediente, esto para la substanciación del recurso de apelación.

Una vez valorados los medios de prueba descritos en supra líneas, de conformidad con las condiciones de la prueba indiciaria previstas en los artículos 446 y 447 del Código de Procedimientos Penales del Estado, de aplicación supletoria en materia administrativa, este órgano colegiado disciplinario determina que, en su conjunto, justifican plenamente que se actualiza la falta administrativa prevista en el artículo 185 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la responsabilidad en que incurrió la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, esto es, omitir formular el proyecto de resolución -auto de radicación- dentro del término de 3 días siguientes al 05 de marzo de 2018.

Dicha conducta consiste en que la Secretaria \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* de la Sala Colegiada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* tardó 31 días hábiles para emitir el acuerdo de radicación del toca civil \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, formado con motivo del recurso de apelación que se planteó dentro del expediente \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, relativo al juicio ordinario civil promovido por \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* en contra de la persona moral denominada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, pues fue hasta el 24 de abril de 2018 que dicha funcionaria formuló el proyecto de resolución, es decir, fuera del término que consagra el artículo 880 fracción I del Código Procesal Civil del Estado, es decir, mucho después de los 3 días siguientes a la llegada de los autos o del expediente.

Con el actuar de la Secretaria Auxiliar, se desprende que ésta transgredió la garantía de celeridad que debe imperar en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 constitucional, es decir, que *[...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta [...],* lo que implicó una afectación al principio de legalidad y de eficiencia que establece el artículo 173 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

En consecuencia, resulta evidente que la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, actualizó la falta administrativa prevista en el artículo 185 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el cual señala que es falta administrativa de los secretarios: omitir formular el proyecto de resolución que se les hubiera encomendado, en el término fijado para ello. Entonces, los miembros del Consejo de la Judicatura determinan que ha quedado plenamente demostrado que la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* incurrió en la falta prevista en el mencionado artículo, la cual es considerada como falta no grave, que amerita apercibimiento o amonestación a criterio de la autoridad disciplinaria, conforme a los indicadores a que se refiere el artículo 196 de la citada ley orgánica.

**TERCERO. Argumentos defensivos de la servidora pública.** Para tener por acreditada la falta administrativa señalada en el considerando que antecede, no constituyó un obstáculo para que quedara justificada la falta administrativa y la responsabilidad de la servidora pública los argumentos defensivos que fueron expuestos por ésta en el acta administrativa levantada el 24 de abril de 2018, ni los que fueron señalados en el informe administrativo que rindió con fecha 26 de abril de 2019, como a continuación se analizará.

1.La servidora pública señalada como posible responsable, para justificar su actuación, señaló -como circunstancias excluyentes de responsabilidad- que en la fecha en que se había recibido el expediente judicial para la substanciación del recurso de apelación estaban en períodos de visitas los juzgados, por lo cual se incrementó de manera considerable la carga de trabajo en el lugar donde se encuentra adscrita, es decir, en la \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, ya que en el período en que omitió elaborar el proyecto del auto de radicación del toca civil \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* le fueron turnados 28 expedientes para su revisión y para elaborar el proyecto de acuerdo.

Además, la funcionaria pública alude que del libro de distribución de expedientes recibidos para su radicación, de las fojas 109 a la 111, se podía constatar el número de los expedientes que le habían sido turnados y que el expediente judicial que analizó, el cual originó el presente procedimiento administrativo, constaba de tres tomos con una totalidad de 2265 fojas útiles.

Ahora bien, de la copia certificada que se obtuvo del mencionado libro, la cual adquiere valor probatorio pleno de lo que en ella se contiene, en primer término, no se desprende que en la fecha en que se recibieron las constancias del expediente \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, para la substanciación del recurso de apelación, estaban en períodos de visitas los juzgados, esto para justificar lo que aludió la servidora pública consistente en que se incrementó la carga de trabajo.

 Por otro lado, si bien es cierto que quedó justificado que a la funcionaria le fueron turnados 28 expedientes para la elaboración de los acuerdos de radicación, en el período comprendido del 05 de marzo al 24 de abril de 2018, esto para su revisión y para elaborar el proyecto de acuerdo respectivo, entre los cuales se encuentra el expediente judicial \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, el cual consta de 3 tomos y de 2,265 fojas, sin embargo, quienes resuelven esta causa determinan que con esas pruebas no es suficiente para que quede justificado que se hubiese actualizado la eximente de responsabilidad administrativa denominada excesiva carga de trabajo, ni la complejidad del asunto.

No obstante que quedó demostrado la cantidad de expedientes que fueron turnados a la \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, así como, las fojas y tomos con que cuenta el expediente judicial que dio origen al presente procedimiento administrativo, sin embargo, para que se actualice la carga de trabajo para justificar una la dilación en que incurrió aquella, es necesario atender a ciertos factores, tales como, que el ingreso de los asuntos al órgano jurisdiccional fue un número que excedió lo normal; que la dilación fue con motivo de atender la complejidad y la cantidad de los hechos o los argumentos que se invocaron en cada uno de los expedientes, para ser resueltos y atendidos en su integridad; a la necesidad de remitirse a distintas legislaciones y apoyos jurisprudenciales para dilucidar puntos no previstos; así como llevar a cabo interpretaciones jurídicas cuando no se prevé legal o jurisprudencialmente una hipótesis particular; todo lo cual ameritaría una alto grado de dificultad a la resoluciones de los asuntos, lo cual impediría que humanamente se pudiese observar de manera puntual los plazos legales para resolver, lo cual no aconteció así en el asunto que se analiza.

Para apoyar la determinación anterior se trae a cuenta como criterios orientadores los emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal bajo los números 74 y 114, que a la letra dicen lo siguiente:

**DILACIÓN. LA BAJA PRODUCTIVIDAD NO CONSTITUYE EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.** No releva de responsabilidad al juzgador el solo hecho de que sostenga que la dilación en el dictado de una resolución obedeció a que el ingreso de asuntos en el órgano jurisdiccional fue un número que excedió al normal, si los que reportó arrojan una baja productividad, que no alcanza la del número de egresos del promedio nacional y del que humanamente sea posible para resolver.

**DILACIÓN. LA COMPLEJIDAD TRASCENDENTAL DEL ASUNTO ES UNA CAUSA QUE PUEDE EXIMIR DE RESPONSABILIDAD AL SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE LE ATRIBUYE.** Si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el principio y garantía de prontitud en la impartición de justicia, cuyo elemento esencial es que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que establecen las leyes, no se puede perder de vista que el constituyente al fijar éstos, no pudo atender, entre otros, a la variada e imprevisible gama de casos que se someten a los tribunales; a la índole, características especiales y naturaleza de las cuestiones jurídicas que se controvierten; la complejidad y cantidad de los hechos y argumentos que en ellos se invocan, los cuales han de ser resueltos y atendidos en su integridad; la existencia de prolongadas cadenas impugnativas a las que hay que dar un seguimiento obligado; a la necesidad de remitirse a distintas legislaciones y apoyos jurisprudenciales para dilucidar puntos no previstos, específicamente, en un solo compendio legal; así como de llevar a cabo interpretaciones jurídicas cuando no se prevé legal o jurisprudencialmente una hipótesis particular; todo lo cual le va dando un alto grado de dificultad a la resolución del caso que, por sí mismo, impide humanamente observar de manera puntual los plazos legales para resolver. De tal manera que, aun existiendo la dilación atribuida, de especial importancia resulta el análisis de las características del caso, para determinar si califica como asunto de complejidad trascendental, en cuyo tenor, si la dilación se ubica dentro de los límites y criterios racional e institucionalmente aceptables, se estará frente a una causa que exime al servidor público de la sanción.

En consecuencia, como no quedó fehacientemente demostrado la excluyente de responsabilidad que alegó la funcionaria pública señalada como posible responsable, consistente en que hubo una excesiva carga de trabajo y por la complejidad de los asuntos que le fueron turnados, los miembros integrantes del Consejo de la Judicatura que resuelven el presente asunto determinan que los argumentos que se analizaron en líneas que anteceden no justifican que se exima de responsabilidad administrativa disciplinaria a la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.

2. Así mismo, la \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* mencionó que, entre la fecha de recepción del citado expediente y su radicación, habían transcurrido 22 días, entre días inhábiles, sábados, domingos y el período vacacional correspondiente a la semana santa; lo anterior, para justificar el retardo en la elaboración del proyecto del auto de radicación del toca civil \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.

Contrario a lo anterior, de los medios de convicción que fueron descritos en el considerando que antecede de este proveído, se desprende que los autos que conformaron el expediente judicial \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, llegaron a la \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* el 05 de marzo de 2018 y que el proyecto del auto que elaboró la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* -el 24 de abril- fue radicado el 25 de abril de 2018, en el cual transcurrieron 32 día hábiles, tal y como se ilustra a continuación:

Marzo de 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|  |  5 (01) Llegada de autos |  6 (02) |  7 (03) |  8 (04) |  9 (05) | 10 |
| 11 | 12 (06) | 13 (07) | 14 (08) | 15 (09) | 16 (10) | 17 |
| 18 | 19  | 20 (11) | 21 (12) | 22 (13) | 23 (14) | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Abril de 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 |  2 (15) |  3 (16) |  4 (17) |  5 (18)  |  6 (19) | 7 |
| 8 |  9 (20) | 10 (21) | 11 (22) | 12 (23) | 13 (24) | 14 |
| 15 | 16 (25) | 17 (26) | 18 (27) | 19 (28) | 20 (29) | 21 |
| 22 | 23 (30) | 24 (31) | 25 Auto deRadicación (32) |  |  |  |

En consecuencia, como se advierte que no se encuentra fundado lo aseverado por la funcionaria pública, se determinó no tomar en cuenta dicho argumento.

3. Por último, la servidora pública señaló que no pudo emitir el proyecto de acuerdo de radicación, con relación al toca civil \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* debido a que la \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en funciones de \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, solicitó licencia para ausentarse de sus funciones durante el período de tiempo que aquella omitió emitir el proyecto del proveído, pues la funcionaria señalada como posible responsable enfatizó que dicha \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* revisaba los acuerdos que se emitían diariamente, aunado a la complejidad del asunto y su voluminosidad.

Ahora bien, respecto a la complejidad y al volumen del expediente, ya quedó demostrado en el punto primero de este apartado que no quedó fehacientemente justificado, por lo tanto, en obvio de múltiples repeticiones no se estima abundar al respecto sobre dicho tema; y por lo que hace a que la \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* no se encontraba entre el 05 de marzo de 2018, fecha en que llegaron los autos del expediente \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, hasta el 25 de abril de 2018 en que se radicó el toca civil \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, toda vez que según la quejosa solicitó licencia para ausentarse de sus funciones, dicha circunstancia no se encuentra justificada, según se desprende del oficio 1277/2019, signado por el licenciado \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, Secretario General de Acuerdos del Pleno y de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual informó en lo que interesa lo siguiente:

[…]

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.

Se tiene a la Secretaria de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura, por solicitando lo señalado en el oficio de cuenta, por lo que en términos del artículo 4, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, comuníquese que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos relativos a las actas de sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, no se encontró licencia alguna solicitada por la \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en el período señalado; sin embargo, se advierte que la referida Magistrada fue comisionada para asistir al conversatorio denominado “Derecho Internacional Privado y Familiar” por lo que se ausentó de las labores propias de su encargo los días diecinueve y veinte de abril del año dos mil dieciocho, lo anterior se hace de su conocimiento con el fin de cumplir lo requerido.

[…]

El anterior medio de prueba adquiere valor probatorio pleno de lo que en ella se contiene, por haberse emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 415, 416 y 436 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que se aplica supletoriamente en materia disciplinaria. De ahí que, al no encontrarse corroborado con algún medio de convicción lo aseverado por la funcionaria pública señalada como posible responsable, los miembros que integran el Consejo de la Judicatura dispusieron no tomar en cuenta el argumento que se analiza.

**CUARTO. Imposición de la sanción.** Una vez comprobada la falta administrativa, así como la plena responsabilidad de la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en su actuar como \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, los que resuelven el presente asunto procederán a determinar la sanción que le corresponde.

 Para tal efecto es conveniente transcribir en un primer lugar los artículos 189, 196 y 198 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, que a la letra dicen:

**ARTÍCULO 189.-** Las sanciones aplicables a las faltas administrativas consistirán en:

I.- Apercibimiento;

II.- Amonestación;

III.- Multa;

IV.- Suspensión;

V.- Destitución del cargo; y

VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.

**ARTICULO 196.-** Las faltas administrativas serán muy graves, graves y no graves.

Para calificar la falta e imponer la sanción correspondiente, la autoridad disciplinaria atenderá a lo previsto por el artículo 198 de esta ley y analizará los siguientes indicadores:

I. La modalidad de la falta en que se haya incurrido;

II. El grado de participación;

III. Los motivos determinantes y los medios de ejecución;

IV. La antigüedad en el servicio;

V. La reincidencia;

VI. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados de la falta; y

VII. El grado de afectación a la administración de justicia.

**ARTÍCULO 198.** Para la aplicación de las sanciones por faltas administrativas, además de lo previsto en los artículos precedentes, se observarán las reglas siguientes:

[...]

III. Las faltas no graves ameritarán apercibimiento o amonestación a criterio de la autoridad disciplinaria, conforme a los indicadores a que se refiere el artículo 196 de esta ley;

[...]

En consecuencia, procede individualizar la sanción con base en el numeral 196, fracciones I a VII, en relación con lo establecido en el artículo 198, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

***1. La gravedad y modalidad de la falta en que incurrió.*** En el caso, la falta administrativa en que incurrió la funcionaria judicial es la contemplada en el artículo 185 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente en que omitió formular el proyecto de resolución -auto de radicación o de inicio- para la substanciación del recurso de apelación que le fue encomendado, en el término fijado para ello, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del artículo 880 del Código Procesal Civil del estado.

Al efecto, el artículo 198 fracción III establece que la infracción administrativa en que incurrió la servidora responsable es de carácter no grave, la cual puede dar lugar a sancionarla con un apercibimiento o una amonestación.

***2. El grado de participación.*** En el caso, quedó demostrado que la funcionaria judicial responsable ejecutó materialmente la conducta descrita en la falta prevista en el artículo 185 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente en que omitió formular el proyecto de resolución -auto de radicación o de inicio- para la substanciación del recurso de apelación que le fue encomendado, en el término fijado para ello, con relación al toca civil \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del artículo 880 del Código Procesal Civil del estado.

***3. Los motivos determinantes y medios de ejecución de la falta.***De acuerdo con las constancias procesales, no se advierten especiales motivos determinantes que llevaran a la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* a cometer la falta.

**4. *La antigüedad en el servicio.*** De conformidad con el expediente personal del servidor judicial que obra en los archivos de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado, es poco más de 19 años, en virtud de que ingresó al Poder Judicial del Estado el 01 de septiembre de 2001. De lo que se infiere, en sana crítica, que cuenta con conocimientos jurídicos suficientes, y amplia comprensión de la relevancia de la función de un servidor público, pues ello se advierte así, por tratarse de una funcionaria que ha desempeñado los cargos de Actuaria y Secretaria de Acuerdo y Trámite.

**5. La reincidencia.** De acuerdo con la hoja de servicio de la autoridad responsable, que se lleva en la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado, se desprende que a aquella se le levantaron dos actas administrativas, una por desempeñarse en forma negligente, toda vez que indebidamente dejó de radicar el expediente \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, por lo cual se le aplicó como sanción una amonestación en fecha 22 de junio de 2009; y la otra, fue porque no se presentó a laborar, en fecha 06 de septiembre de 2012, sin embargo, dichas sanciones no pueden ser consideradas en su perjuicio, toda vez que ya pasó el tiempo que establece la ley para que puedan ser consideradas como conductas que acrediten una reincidencia.

Ahora bien, si bien es cierto que al servidor público se le levantaron las actas administrativas antes descritas, por la comisión de una conducta análoga, ello no implica que se actualice el supuesto de la reincidencia, toda vez que no constituyen sanciones derivadas de un procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria.

Cobra aplicación el siguiente criterio emitido por el Consejo de la Judicatura Federal:

**REINCIDENCIA. NO SE ACTUALIZA EN EL CASO DE QUE EL FUNCIONARIO JUDICIAL HAYA RECIBIDO SIMPLES EXTRAÑAMIENTOS POR PARTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.** El hecho de que al funcionario judicial denunciado se le hayan formulado diversos extrañamientos por la comisión de conductas análogas, a aquella que constituyó causa de responsabilidad en un procedimiento disciplinario, no implica que se actualice el supuesto de reincidencia, cuando tales extrañamientos no constituyan sanciones derivadas de un procedimiento administrativo de responsabilidad.[[1]](#footnote-1)

**6. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado de la falta**. De las circunstancias en que la autoridad responsable incurrió en la falta administrativa que quedó precisada en el considerando segundo de este proveído, no se advierte que haya obtenido un beneficio económico, ni causado daños o perjuicios con motivo de la infracción legal.

**7. El grado de afectación a la administración de justicia**. La licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* lesionó la administración de justicia, pues originó una afectación al principio de legalidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, lo anterior, al omitir formular el proyecto de resolución -auto de radicación o de inicio- que le fue encomendado con relación a la substanciación del recurso de apelación que fue interpuesto dentro del expediente \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en el término establecido por la fracción I del artículo 880 del Código Procesal Civil del estado, es decir, al día siguiente a la llegada de los autos, pues al haber transcurrido treinta y un días, no contando los días inhábiles, lesionó de igual forma el principio de la impartición de la administración de justicia de manera pronta, según lo prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, el derecho fundamental de justicia pronta y expedita está encaminado a asegurar que tanto jueces como secretarios sujeten sus obligaciones a los términos que marca la ley o, en su caso, a las condiciones y términos que los titulares disponen, lo que en el caso no aconteció, pues es evidente que la actuación de la servidora judicial trascendió en la demora del proceso judicial \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.

Analizado lo anterior, se obtiene que el grado de responsabilidad administrativa de la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* tiene consecuencias sancionatorias de carácter no grave, pues aún y cuando incumplió con los deberes y funciones propias del cargo, la ley estima que su conducta no es de carácter grave, y que por ello sólo amerita imponer como sanción apercibimiento o amonestación. Para determinar cuál de las dos sanciones es la aplicable al caso, partiremos de los indicadores que refiere el artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el apercibimiento consiste en la prevención verbal o escrita que se haga a la servidora pública, en el sentido de que de incurrir en nueva falta, se la aplicarán una o más de las sanciones previstas en el artículo anterior, según sea el caso. Mientras que la amonestación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 191 de la legislación en cita, consiste en la reprensión que se haga a la infractora, por la falta cometida.

 Por lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 185 fracción VI, 189, 190, 191 y 198 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al tomar en consideración los indicadores que favorecen a la funcionaria judicial, tales como que no se encuentra en el supuesto de la reincidencia; ni existen motivos en la determinaron de la comisión de la falta; que no causó daño o perjuicio económico con motivo de su conducta; y como factores que le perjudican la modalidad de la falta en que incurrió; el grado de participación; la antigüedad en el servicio y el grado de afectación a la administración de justicia.

 De ahí que, de la apreciación en conjunto de los anteriores indicadores, se estima justo y proporcional imponer como sanción a la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, un apercibimiento, el cual consistirá en la prevención verbal que deberá hacerse a la funcionaria pública judicial, en el sentido de que de incurrir en nueva falta se le aplicará una o más de las sanciones previstas en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, según sea el caso; de lo cual se deberá dejar constancia en acta, que deberá levantar el funcionario que notifique la presente resolución y ejecute la sanción impuesta.

Por otra parte, es importante destacar que la sanción impuesta a la servidora pública judicial, es el resultado de un procedimiento llevado con estricto apego al marco constitucional y convencional, por lo que con ella no se vulneran los derechos humanos de la funcionaria pública, acorde con los razonamientos siguientes:

 Por un lado, dicha sanción es el resultado de un procedimiento en el que se le otorgó a la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, el derecho de ser oída en su defensa, con las debidas garantías y en un plazo razonable, por la instancia competente, independiente e imparcial; se le siguió un procedimiento establecido con anterioridad en la ley; fue debidamente citada, con la anticipación necesaria; se le dio a conocer previamente las conductas irregulares y las causas probables de responsabilidad administrativa que se le atribuían; se le concedió el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa; rindió un informe administrativo, ofreció las pruebas en su defensa, las cuales fueron desahogadas en su momento, así como analizadas y valoradas en esta resolución.

 En conclusión, se insiste en que al fijar la sanción mencionada, este cuerpo colegiado respetó plenamente los derechos humanos de la funcionaria, pues en todo momento se actuó con base en lo previsto en las leyes, se acataron los principios que rigen los procedimientos y se le otorgó la garantía judicial de ser oída en su defensa.

 La sanción impuesta deberá ejecutarse mediante la notificación personal de esta resolución a la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, quien puede ser notificada en el inmueble que ocupa su actual lugar de trabajo al que se encuentra adscrita.

**QUINTO. Efectos Administrativos.** De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, remítase copia certificada de esta resolución a la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado, para que anote en la hoja de servicios de la referida funcionaria judicial la sanción impuesta, hecho lo anterior, lo comunique vía oficio a la Secretaría de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura para debida constancia.

Por lo expuesto y fundado, este Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza emite el siguiente:

**R E S U E L V E**:

**PRIMERO.** Se determina que quedó debidamente demostrada la responsabilidad administrativa disciplinaria en que incurrió la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en su actuar como \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*.

**SEGUNDO.** Se impone a la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* una sanción consistente en un apercibimiento, en términos del considerando cuarto de esta resolución.

**TERCERO.** Comuníquese esta resolución a la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado, a efecto de que anote la sanción impuesta a la funcionaria pública judicial en la hoja de servicios y, hecho lo anterior, lo comunique vía oficio a la Secretaría de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura para debida constancia.

**CUARTO.** Se instruye a la Secretaria de Acuerdo y Trámite para que traslade copia certificada del presente acuerdo al acta de sesión relativa del que formará parte.

Notifíquese personalmente; al efecto, se instruye a la actuaría de éste órgano colegiado notifique personalmente esta resolución a la licenciada \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, en su actual centro de trabajo y ejecute la sanción impuesta, de lo cual se deberá dejar constancia mediante una acta; asimismo, se deberá notificar personalmente al defensor particular de la servidora judicial, en el forma que se hubiese acordado dentro del expediente disciplinario.

Eora

Así lo acordaron y firmaron los miembros integrantes del Consejo de la Judicatura que estuvieron presentes en sesión celebrada el día veintinueve de septiembre de dos mil veinte, por ante la Secretaria de Acuerdo y Trámite que autoriza y da fe.

[R Ú B R I C A]

**MGDO. MIGUEL FELIPE MERY AYUP**

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

|  |  |
| --- | --- |
| [R Ú B R I C A]**MGDO. HOMERO RAMOS GLORIA**CONSEJERO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | [R Ú B R I C A]**MGDO. LUIS MARTÍN GRANADOS SALINAS**CONSEJERO DE TRIBUNAL DISTRITAL |
| [R Ú B R I C A]**LIC. ROMÁN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ**CONSEJERO DEL PODER EJECUTIVO  | [R Ú B R I C A]**LIC. OBED SANTIBAÑEZ CABRALES** CONSEJERO DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA |

[R Ú B R I C A]

**DIP. LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA**

CONSEJERO DEL PODER

LEGISLATIVO

[R Ú B R I C A]

**LIC. ROSALBA IXCHEL RODRÍGUEZ VILLAGRANA**

SECRETARIA DE ACUERDO Y TRÁMITE DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO



1. **Criterios en Materia Disciplinaria del CJF. Criterio Número: 9** [↑](#footnote-ref-1)